

Efectos de la violencia en la producción agropecuaria

Jesús Antonio Bejarano

A modo de introducción, quisiera hacer tres anotaciones; la primera, que soy el primero en sorprenderme de que se incluya un tema como este en un evento que tiene una tradición estrictamente económica, lo que sugiere ciertamente, que la violencia ha adquirido tales magnitudes que se convierte en una variable que desborda las consideraciones de orden público para convertirse en una de las claves de la interpretación económica. Esta consideración, al menos en Colombia, no es tan obvia como parece. No existe ningún antecedente en la literatura disponible, la cual por cierto, se ha concentrado en examinar las raíces económicas de la violencia, la violencia como negocio, en fin, sin que se haya hecho un esfuerzo de reflexión sistemática apoyado en evidencias confiables.

La segunda anotación es la de que además, a juzgar por algunos artículos de prensa y de revistas no especializadas, la violencia al parecer se ha convertido, al menos en las últimas semanas, en la única variable de interpretación económica a la que se asocian toda suerte de desajustes a contravía de las estadísticas, de los hechos, y aun de

la misma lógica: "Baja 45% crédito agrario por causa de la violencia" titula un redactor de *El Tiempo* haciendo caso omiso de todos los factores que determinan el crédito. Afirmación similar a propósito de la Inversión en Sociedades se pone en boca del presidente de Confecámaras en otro artículo de "El Tiempo"¹ "Se vende un país por culpa de la inseguridad", titula otro comentarista apoyándose en cifras dudosas, y un experto economista como Juan Camilo Restrepo no duda en atribuir a la inseguridad la fuga de capitales, la caída de la inversión extranjera y de la inversión minera, entre otros efectos, al tiempo que el propio Secretario Económico de la Presidencia culpa a las guerrillas de la inflación².

La tercera anotación es que habitualmente, cuando se alude a la violencia, se hace referencia a la violencia política, especialmente a las actividades guerrilleras, las que en este cuadro catastrofista resultan fácil explicación para todas las calamidades nacionales.

No es mi intención minimizar y menos ignorar las implicaciones económicas de la

* Conferencia presentada en el Seminario sobre "La Política Económica y el sector privado", organizada por CONFECAMARAS y la Universidad de Los Andes entre el 26 y el 27 de junio de 1988.

¹ "El Tiempo", junio 15 y 16 respectivamente.

² Juan Camilo Restrepo "Orden Público y Económico, de la Mano", *Revista Credencial*, junio de 1988 y *El Tiempo*, junio 16 de 1988.

violencia. Pero sí quisiera hacer un esfuerzo para situarlas en dimensiones razonables, al menos en lo que se refiere al Sector Agropecuario, el que ciertamente tiene que asumir la mayor parte de los costos de la violencia política, aunque no necesariamente de las demás formas de violencia.

En primer término, es necesario reiterar aquí que el país experimenta diversos tipos de violencia, de muy distintos orígenes, de modalidades regionales heterogéneas y con distintas implicaciones económicas y socio-políticas. Un estudio reciente muestra por ejemplo, que el homicidio constituyó en 1986 la segunda causa de muerte, haciéndose responsable del 9.76% del total de las defunciones, y del 44.29% del total de muertes violentas. Sin embargo, considerando el período 1982-1986, sólo entre un 5% y un 15% del total de los homicidios podría ser atribuible a causas políticas, al tiempo que el incremento en el número de homicidios entre 1983 y 1986 sería explicable máximo en un 37% por la causa señalada³. Además, conviene recordar que una buena parte de los recientes homicidios de carácter político han sido causados por el narcotráfico, tanto en zonas rurales como urbanas.

Adicionalmente, la mayor parte de los secuestros con fines extorsivos son practicados por la delincuencia común, mientras que la guerrilla realiza principalmente secuestros con fines publicitarios o políticos. De los 252 secuestros registrados en 1988, dos son atribuidos a los narcotraficantes, 88 a la delincuencia común y 162 a la guerrilla, de los cuales por lo menos 70 tuvieron fines políticos o publicitarios y no de extorsión económica.

Con los datos anteriores quiero sugerir, de una parte, que la violencia política es apenas una de las manifestaciones de la violencia y, de otra parte, que la inseguridad no puede ser asociada ni exclusiva ni principal-

mente a la violencia política, sino a un espectro cada vez más amplio de conductas delincuenciales de las más diversas manifestaciones regionales y aun locales, que desde la perspectiva económica implican grados de incertidumbre totalmente distintos según las causas y los alcances de esas conductas delincuenciales.

Estas anotaciones son relevantes porque las implicaciones económicas del clima de inseguridad proveniente, por ejemplo, de la delincuencia común parecen distintas a las asociadas exclusivamente a la violencia política. En el primer caso, se genera una incertidumbre no claramente localizada que difícilmente permite identificar grados y formas de respuesta. La segunda tiene formas más precisas de expresión que derivan del dominio, el control o la presión de un grupo armado sobre un territorio, y es este el aspecto al que quisiera referirme.

Por supuesto, es necesario identificar los varios niveles en que esta última forma de violencia produce efectos económicos. En primer término, en el nivel agregado, cuando en forma directa se afecta la actividad económica mediante la interrupción de circuitos importantes como los transportes, o en forma indirecta, cuando la incertidumbre generada por la violencia afecta los niveles de inversión, los precios de la tierra, la disponibilidad de fuerza de trabajo u otras variables con un alcance local o regional. Un segundo nivel es el que se refiere a los efectos sobre variables agregadas específicas tales como los recursos fiscales, los gastos militares, etc. y un tercer nivel, el que afecta actividades específicas en regiones particulares, que según su importancia pueden o no incidir sobre el conjunto de la economía, tal como el caso de la producción ganadera o bananera.

Son bien conocidos los recursos fiscales que se han dirigido a las Fuerzas Militares y al control de conflictos en áreas de violencia, así como los esfuerzos del gobierno para reorientar el gasto público en favor de las regiones en las cuales, por razones históricas, se han generado situaciones de inse-

³ Rodrigo Lozada Lora y Eduardo Vélez Bustillo, *Muertes violentas en Colombia, 1979-1986* Instituto SER de Investigación, abril de 1988.

guridad que estimulan el conflicto social y las actividades de los grupos armados, y no es del caso referirse aquí a esos aspectos.

Los efectos directos de la actividad guerrillera sobre actividades económicas se refieren principalmente a la voladura de oleoductos y a la producción bananera en Urabá. Se estima que hasta 1987 los actos terroristas contra oleoductos habían ocasionado pérdidas por \$15 mil millones de pesos y en lo que va corrido de 1988, donde se han acentuado notablemente los atentados, las pérdidas pueden estar cercanas a los \$14 mil millones de pesos. En cuanto a la producción de banano, los empresarios estiman que la situación de violencia de Urabá puede haber ocasionado pérdidas equivalentes al 5% del valor total de la producción. Con todo, los efectos más preocupantes en relación con el curso de la economía pudieran ser los asociados a la incertidumbre que genera en las inversiones la actividad guerrillera, y la violencia desatada por el narcotráfico en algunas áreas rurales, lo que eventualmente pudiera conducir a severos impactos sobre la producción agropecuaria. No debe olvidarse que en la raíz del incremento de la violencia en los últimos años está la conversión del narcotraficante en terrateniente (Meta y Córdoba son buenos ejemplos), lo que además pudo alterar los precios de la tierra y eventualmente pudo traducirse en auges regionales⁴.

Las cifras indican que no obstante el incremento de la violencia, el sector está experimentando una notoria recuperación; el crecimiento en 1987 se situó en 5,8% contra el 3,3% de 1986 y se estima para 1988 una tasa del 4%. Excluido el café, el crecimiento agropecuario en 1987 fue de 4,7% estimándose para 1988 una tasa de 4,1%⁵. Entre 1986 y 1987 la superficie cultivada

se incrementó en 5,12%. Incluso la superficie sembrada de banano de exportación se aumentó en 5,06% y la producción en 8,03% y en palma africana los aumentos fueron de 4,92% y 4,29% respectivamente, en áreas en las cuales los conflictos fueron acentuados. Más aún, la variable que mejor refleja la incertidumbre de largo plazo es la formación bruta de capital fijo que experimentó una notoria recuperación. Entre 1980 y 1985, su crecimiento se situó en 0,5% y entre 1985 y 1987 en 3,6%.

Adicionalmente, la formación de capital en mejora de tierras y desarrollo de plantaciones, que en el primer período tuvo un comportamiento negativo (-2,7%), en el segundo fue de 5,5%, superior a la tasa del conjunto de la economía que fue de 5,2% (Ver cuadro 1). Por supuesto, la pregunta sin respuesta es qué hubiera ocurrido con estos indicadores en un clima de normalidad, pero el hecho es que o bien los agricultores no han incorporado la inseguridad como un factor de incertidumbre en la inversión, o bien los factores favorables la han compensado, o bien la violencia tiene efectos regionales que no afectan sensiblemente el comportamiento global del sector. A mi juicio, una explicación de por qué "el sector agropecuario va bien y el país rural va mal" contiene todos estos elementos.

De una parte, la experiencia de procesos revolucionarios en otros países sugiere que la percepción de estos procesos por parte de los sectores dirigentes es la de negarse a verlos más que como estremecimiento de demencias y crímenes colectivos, más o menos transitorios, que pueden ser suprimidos con un poco más de autoridad y un poco más de policía⁷.

Una evaluación sobre la violencia en áreas ganaderas apoyada en entrevistas hechas en 1982, no sólo concluye que existe una tendencia generalizada de los ganaderos hacia la evasión de todo tipo de responsabilidades legales hacia sus trabajadores y un

⁴ Ver Hernando José Gómez "La economía ilegal en Colombia, tamaño, evolución, características e impacto económico", en esta misma edición de *Coyuntura Económica*.

⁵ *Coyuntura Económica*, Vol. XVIII, No. 2, junio de 1988.

⁶ Véase André Decouflé, *Sociología de las Revoluciones*, Edic. Proteo, Buenos Aires, 1968.

CUADRO 1
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA FORMACION BRUTA
DE CAPITAL FIJO EN LA AGRICULTURA
(1970 - 1987)

Períodos	Mejoras de Tierras y Desarrollo de Plantaciones	Estimación FBKF en la Agricultura	Total FBKF en la Economía
1970-1975	7.3	4.8	3.7
1975-1980	2.3	3.8	6.4
1980-1985	-2.7	0.5	1.6
1985-1987 ^a	5.5	3.6	5.2

^a 1986 es preliminar y 1987 es proyectado.

Fuente: DNP-UDA-SITOD con base en el DANE.

claro desinterés por cuestiones de beneficio público donde ellos no obtengan una ventaja, sino que critica "la concepción fuertemente individualizada del ganadero acerca del problema de la violencia social y de la inseguridad rural. Para el común de los hacendados, la emergencia de conflictos sociales en el agro, es el resultado de la falta de autoridad policial y/o militar. Llevando este razonamiento a un plano práctico, las medidas que se exigen para aplicar o mitigar la violencia y la inseguridad tienden naturalmente hacia un aumento del pie de fuerza de la policía y del ejército, o una mejor dotación y equipamiento de la tropa, y eventualmente hacia la formación de unidades paramilitares"⁸.

Actitudes equivalentes de percepción sobre los alcances del conflicto se registran en un trabajo reciente sobre la zona de Urabá⁹. Si ello es así en zonas de abierto conflicto, mucho más debe serlo en áreas en las cuales

⁷ Jairo Morales Nitero, *Bases para la formulación de una política de desarrollo en regiones ganaderas de violencia social*, Bogotá, julio de 1982.

⁸ Gerard Martín, *Desarrollo Económico sindicalismo y proceso de paz en Urabá*, agosto de 1986.

la violencia política no pasa de ser una molestia ocasional cuya carga puede ser delegada en administradores.

De otra parte, al considerar la inseguridad dentro de un rango de obstáculos para la actividad agraria, entrevistas realizadas por Roberto Junguito concluyen que para el conjunto de encuestados ella está por debajo de la falta de incentivos y de la ineficiencia institucional y en el mismo nivel que el comportamiento de los mercados internacionales¹⁰. Además, al discriminar según actividad de los interrogados entre economistas y dirigentes gremiales, campesinos, políticos y funcionarios, no se encuentran diferencias en los rangos descritos respecto a influencia de las variables. Ello muestra que salvo algún afán más bien publicitario, la inseguridad es percibida como uno más entre los factores que pueden afectar la producción.

Finalmente, conviene examinar con algún detalle las dimensiones regionales de los factores de inseguridad y violencia que pueden generar incertidumbre, a efectos de

⁹ Roberto Junguito, *El Sector Agropecuario y la Política Macroeconómica en Colombia*. Mimeo, abril de 1988.

cualificar los posibles efectos sobre la actividad agropecuaria.

Hemos seleccionado cuatro factores, además de los homicidios, que desempeñan un papel relevante como elementos indicativos de la inseguridad y la violencia y que pueden generar incertidumbre: (i) El secuestro efectuado por la guerrilla; (ii) las acciones armadas, que incluyen enfrentamientos, em-

boscadas, actos terroristas, hostigamiento y ataques a instalaciones o poblaciones; (iii) la población rural bajo cualquier tipo de presión, como un indicador del área real de acción de la guerrilla, y (iv) las invasiones de tierras, que independientemente de si son o no justas, se convierten en todo caso en un importante factor de incertidumbre. Estos indicadores se recogen en los cuadros 2 y 3 y en los mapas 1 y 2.

CUADRO 2
RESUMEN DE SECUESTROS, ACCIONES ARMADAS Y POBLACION RURAL
BAJO PRESION DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS^a
Enero 86 – Diciembre 87

Departamento	No. Secuestros	No. Acciones Armadas ^b	Población Rural bajo presión ^c (o/o)	Población Total bajo presión (o/o)
Santander	27	116	51.5	19.0
Cesar	26	28	24.9	10.0
Norte de Santander	24	63	33.8	11.0
Antioquia	17	340	16.5	5.5
Caquetá	16	33	88.0	45.0
Meta	13	33	59.9	21.0
Cauca	13	101	16.0	10.4
Arauca	13	87	61.8	26.4
Huila	10	52	52.0	23.0
Bolívar	10	25	14.0	4.7
Cundinamarca	6	60	14.6	8.0
Sucre	6	3	13.4	6.2
Córdoba	5	53	23.6	13.0
Tolima	5	33	18.6	8.3
Casanare	5	28	30.1	19.6
Putumayo	3	28	53.4	35.7
Guaviare	3	13	80.0	88.0
Caldas	2	11	32.0	12.0
Boyacá	1	26	16.3	10.0
Magdalena	1	9	14.4	6.0
Valle	1	121	20.9	3.8
Risaralda	1	6	22.2	7.0

(a) FARC, EPL, ELN y M-19.

(b) Incluye: Contactos armados, emboscadas, acciones terroristas, hostigamientos, ataque a instalaciones y poblaciones.

(c) Se obtiene de la población rural departamental en cada caso.

Fuente: DAS y estimativos de la Consejería Presidencial para la reconciliación, normalización y rehabilitación.

CUADRO 3
EVALUACION DEPARTAMENTOS CON CONFLICTOS
POR LA TIERRA
1987

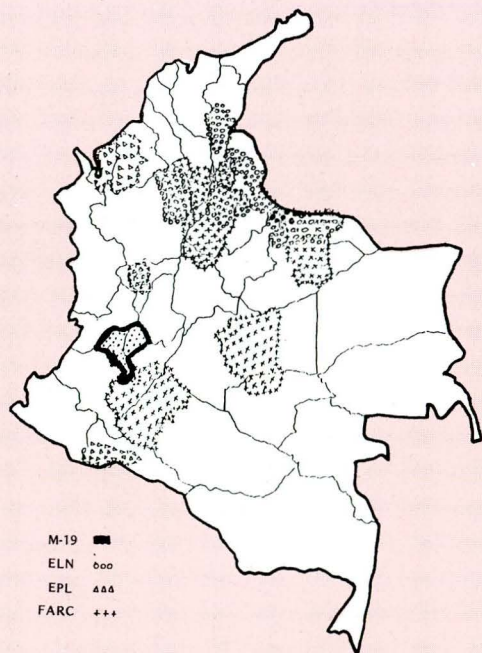
Departamento	No. Municipios	No. Predios en conflic.	Area Total (Has)	No Ocupantes
Atlántico	9	9	5.099	217
Antioquia	14	44	21.031	2.490
Bolívar	3	3	157	155
Cauca	10	34	3.244	2.707
Cesar	8	28	17.729	718
Cundinamarca	5	10	2.288	62
Córdoba	7	15	10.535	596
Huila	1	2	924	177
Magdalena	12	39	21.610	936
Meta	7	18	101.031	394
Nariño	1	2	70	15
Putumayo	3	1	210	24
Nte. Santander	4	9	2.760	208
Caldas-Risaralda	2	1	53	60
Santander	6	12	4.403	229
Tolima	1	1	386	55
Sucre	15	46	20.473	2.645
TOTALES	108	279	215.756	11.541

Fuente: INCORA – ANUC.

Evidentemente la población bajo algún tipo de presión (secuestro, extorsión, amedrentamiento, influencia, etc.) es significativamente alta y representa el 7.9% de la población del país y el 23.6% de la población rural. En algunos casos, como Caquetá y Guaviare supera el 80% de la población rural; por encima del 50% se encuentran Meta, Arauca, Huila y Putumayo y en todas las regiones se encuentra por encima del 15%, cifras de suyo inquietantes. Por otra parte, las invasiones de tierras afectaron en 1987, 215.756 hectáreas especialmente en Antioquia, Cesar, Sucre, Córdoba, Meta, en tanto que los secuestros afectaron especialmente los Santanderes, Cesar, Antioquia y Caquetá y en menor medida Meta, Cauca, Arauca, Huila y Bolívar.

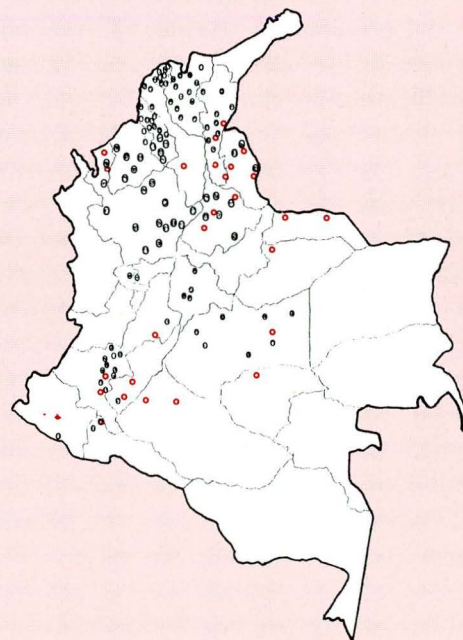
Un observador que desprevenidamente viera por separado los indicadores y su diaria evolución, llegaría, sin duda a sobreestimar considerablemente su significación. Mucho me temo que estamos expuestos a un diario bombardeo de noticias sueltas e inquietantes que dejan en el lector de prensa la sensación de un desbarajuste global que afecta por igual todas las zonas del país. Al cruzar los indicadores sin embargo, se encuentra que no son estrictamente coincidentes, es decir, los secuestros no son siempre coincidentes con las acciones armadas y ni estas con las tomas de tierra. De hecho, cada factor de inseguridad es más intenso en unas zonas que en otras y la coincidencia de los indicadores sólo se presenta en el sur del Huila, oriente del Cauca, centro y occiden-

MAPA 1
 CONCENTRACION DE LAS ACCIONES ARMADAS
 DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS
 1986 – 1987



M-19 ■
 ELN ○
 EPL *
 FARC ++

MAPA 2
 CONCENTRACION GEOGRAFICA DE LOS SECUESTROS
 DE LA GUERRILLA Y DE LOS MUNICIPIOS
 CON CONFLICTO POR LA TIERRA



- Concentración de los secuestros de la guerrilla entre enero de 1986 y abril de 1988.
- Municipios con conflicto por la tierra, según información INCORA-ANUC.

CUADRO 4
GRADO DE INTENSIDAD POR REGIONES DE LA VIOLENCIA
EN COLOMBIA

	Acción Armada	Secuestros	Toma de Tierras	Población bajo presión (%)
S. Huila	xx	xx	x	52.0
Oriente Cauca	xxx	xx	xxx	16.0
Centro - Occ. Norte				
Santander	xxx	xxx	x	51.0
Urabá Sur Occidente-				
Córdoba	xx	x	xx	16.5
Cesar Sur	x	xxx	xx	24.0
Arauca	xx	x		61.8
Meta	x	xx		
Norte de Santander	xx	xxx	x	33.8
Casanare	x			
Caquetá	x	xxx		30.1
S. Tolima	x	x		8.6
N. del Huila				
S. Oriente Valle	xxx			20.9
Magdalena		x	xxx	14.4
Sucre	x	x	xxx	13.4
Cundinamarca	xx	x	x	14.6
S. Oriente Antioquia			x	16.5

INTENSIDAD

xxx = Alta

xx = Media

x = Baja

Fuentes: Cuadros 1 y 2 y mapas 1,2.

te de Santander, Urabá y suroccidente de Córdoba, como se describe en el cuadro 4. Evidentemente, estas zonas se constituyen en las áreas más críticas del país en materia de orden público.

Por otra parte, los acontecimientos recientes señalan con preocupación hacia la Costa Norte, Cesar, Sucre y Córdoba principalmente, en las cuales, de no resolverse pronto la presión sobre la tierra, pueden generarse dificultades de considerable magnitud hacia el futuro.

económicas sobre las cuales recae la presión de la inseguridad puede ser más o menos identificada. Sin duda, los efectos de la relación, narcotráfico-guerrilla lograron durante un tiempo incrementar los salarios en algunas zonas especialmente en Caquetá, Vichada y Guaviare, donde los salarios al menos hasta 1986, estuvieron más del 40% por encima del promedio rural nacional¹⁰. La caída del precio "de la coca" en esas zonas, no sólo incrementó el conflicto entre narcotráfico y guerrilla, sino que dejó una

En rigor, cada una de las áreas críticas está más o menos localizada y las actividades

¹⁰ Hernando José Gómez, *op. cit.* en esta revista, pág. 105

vasta masa campesina con pocas posibilidades de supervivencia.

No disponemos de información desagregada sobre la producción en las zonas críticas, pero un indicador podría ser el crédito del Fondo Financiero Agropecuario para siembras de corto y mediano plazo y para la actividad ganadera. Cabe recordar que el crédito de corto plazo aumentó entre 1986 y 1987 en un 4.19%. Sin embargo, en Cauca disminuyó 44.6%, en Cesar 50.2%, en Norte de Santander 94.2% y en Santander 44.9%. El de mediano plazo aumentó 26.09%, pero en Cauca bajó en 34%, en Santander 41.2%, en Norte de Santander 67.9% y en Arauca 61.3%. Igualmente, la reducción del crédito para ganadería fue del 70% en Caquetá y cercano al 30% en Antioquia y Cesar, el crédito para ceba disminuyó más del 50% en Bolívar, Cauca, Huila y Norte de Santander y en más del 40% en las otras regiones críticas. Igual comportamiento tuvo el crédito para ganadería de doble propósito.

Hay que ser cuidadoso sin embargo, con cualquier conclusión relativa a responsabi-

lizar exclusivamente a la inseguridad de la caída del crédito en las actividades de esas regiones, pues se sabe que especialmente en ganadería, factores como el ciclo ganadero están incidiendo en la demanda de crédito.

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que por lo general sólo una parte de cada una de las regiones está realmente afectada por actividades guerrilleras. Una forma gruesa para estimar el impacto de la inseguridad sobre el conjunto de la actividad agropecuaria nacional es estimar la contribución de las regiones críticas al PIB y suponer que en cada región la parte afectada del producto agropecuario regional es equivalente a la población bajo presión en la respectiva región. Los resultados de este ejercicio se presentan en el cuadro 5.

De hecho la suma del producto agropecuario de los departamentos críticos representa el 33.52% del PIB agropecuario total. Sin embargo, como las proporciones de las poblaciones afectadas en cada región van desde el 16% en Antioquia hasta el 60% en el Meta, el producto agropecuario real-

CUADRO 5
CALCULO DE LA PROPORCION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
AFECTADA POR LA VIOLENCIA
(%)

	Población Rural Bajo Presión	PIB Agropec. Regional/ PIB Agropec. Nacional	Produc. Agrop. Nacional Afectado	Producc. Agrop. Regional/ PIB Regional Total	Producto Regional Total afectado
Huila	52.0	2.51	1.30	37.7	19.6
Cauca	16.0	3.08	0.49	49.9	8.0
Santander	51.0	4.77	2.43	23.1	11.8
Antioquia	16.0	6.80	1.08	12.5	2.0
Meta	59.9	3.16	1.89	53.0	31.7
Córdoba	23.6	6.23	1.47	58.4	13.9
Cesar	24.9	4.37	1.08	47.4	11.8
N. de Santander	33.8	2.60	0.88	31.5	10.6
Total Nacional		33.52	10.62		

Fuente: Cuadro 1 y Anexo 1.

mente afectado equivalente al 10.6% del total agropecuario nacional, a partir del cual podría estimarse el efecto sobre la tasa de crecimiento del sector agropecuario.

En realidad, este impacto global parece relativamente bajo como quiera que las regiones que más contribuyen en el PIB agropecuario, como Cundinamarca, Valle y las zonas cafeteras, no están asediadas por conflictos significativos. Sin embargo, a nivel regional, los efectos son mucho más pronunciados precisamente por la composición de las actividades económicas en las regiones críticas. Haciendo el mismo ejercicio a nivel regional cuyos resultados aparecen también en el cuadro 5, se encuentra que mientras en Antioquia el producto regional afectado es sólo del 2%, y en Cauca el 8.0%, en regiones como Meta asciende al 31.7%, en el Huila al 19.6% y en las demás regiones supera el 10%, efectos

que de alguna manera son indicativos de los grados de respuesta regionales a las situaciones de conflicto.

Será necesario insistir en que la capacidad de la violencia para generar incertidumbre depende no sólo de las percepciones que se tengan sobre ella y sobre su potencialidad para expandirse sino de sus alcances reales respecto de las actividades productivas. En cuanto a lo primero, quizá nos estemos equivocando doblemente al atribuirle para fines publicitarios efectos macroeconómicos que no tiene y al sobreestimar las posibilidades de derrotarla por la vía de la fuerza. En cuanto a lo segundo, si bien los efectos no tienen el alcance global que suele atribuírseles, existe un potencial de propagación que tampoco puede subestimarse y que requiere de esfuerzos globales y regionales antes de que comprometa áreas vitales de la economía.

ANEXO 1
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PIB Y DEL PIB AGROPECUARIO
POR DEPARTAMENTOS

	PIB AGROPECUARIO con respecto al PIB total del Depto. %	PIB Agropecuario con respecto al PIB Agropecuario Nacional %
Antioquia	12.5 (f)	6.80
Atlántico	6.2 (a)	1.13
Bolívar	34.1 (a)	5.71
Boyacá	41.8 (b)	5.91
Caldas	27.1 (b)	2.83
Caquetá	-	-
Cauca	49.9 (c)	3.08
Cesar	47.4 (a)	4.37
Córdoba	58.4 (a)	6.23
Cundinamarca (sin Bogotá)	49.0 (c)	20.81
Chocó	8.3 (a)	0.77
Huila	37.7 (a)	2.51
La Guajira	17.5 (a)	0.69
Magdalena	55.9 (a)	4.82
Meta	53.0 (a)	3.16
Nariño	29.5 (b)	2.27
Norte de Santander	31.5 (c)	2.60
Quindío	28.5 (a)	1.21
Risaralda	18.9 (a)	1.62
Santander	23.1 (b)	4.77
Sucre	74.3 (a)	4.37
Tolima	47.7 (b)	7.77
Valle del Cauca	13.7 (b)	6.52
Total	98.01	100.00

Notas:

- (a) 1980
- (b) 1981
- (c) 1982
- (d) 1983
- (e) 1984
- (f) 1985

Fuente: DNP-UDRU, Diagnóstico regional y urbano, 1987.

* Cuentas Regionales de Colombia 1960-1975. DNP 1977.